

MODIFICACION DE MEDIDAS.DENEGACION REDUCCIÓN PENSIÓN DE ALIMENTOS HIJOS MENORES. PROGENITOR NO CUSTODIA EMPRESARIO. FIJADO EN CONVENIO REGULADOR REGULADOR 2.250€ PENSIÓN ALIMENTOS. VALORACION DE LAS PERICIALES

La Audiencia confirma la sentencia del juzgado denegando la reducción de la pensión de alimentos por importe de 2.500€ que se estableció de mutuo acuerdo en el convenio regulador y que anteriormente a esta demanda ya se había interpuesto demanda de modificación de medidas denegando la reducción, ya que el tren de vida del demandante, los signos externos y despatrimonialización personal y el cierre de la empresa debiendo extraerse como conclusión de la valoración de la prueba, que no se acreditó una alteración de circunstancias fundamentadora de la pretendida reducción de la cuantía de la pensión de alimentos de las hijas, no difiriendo la situación, salvo en lo formal, de la que fue alegada en el procedimiento que terminó con la sentencia dictada en el anterior procedimiento el demandante se dio de baja el 30/9/2019, fecha coincidente con la interposición de la demanda, salvo en el régimen de autónomos, en el que se dio de baja en octubre de 2020, pagando las deudas que tenía con la Seguridad Social, sin explicación acerca de no haber destinado cantidades a pagar la deuda por alimentos a sus hijas

Sentencia Audiencia provincial de Valladolid de 27 enero 2022. Número Sentencia: 13/2022 Número Recurso: 550/2021 Numroj: SAP VA 227/2022 Ecli: ES:APVA:2022:227 Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#) Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 13 de VALLADOLID

Jurisdicción: Civil

Ponente: [Emma Galcerán Solsona](#)

Origen: Audiencia Provincial de Valladolid

Fecha: 27/01/2022

Tipo resolución: Sentencia

Sección: Primera

Número Sentencia: 13/2022

Número Recurso: 550/2021

Numroj: SAP VA 227/2022

Ecli: ES:APVA:2022:227

ENCABEZAMIENTO:

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

VALLADOLID

SENTENCIA: 00013/2022

Modelo: N10250

C.ANGUSTIAS 21

Teléfono: 983.413486 Fax: 983413482/983458513

Correo electrónico:

Equipo/usuario: MGG

N.I.G. 47186 42 1 2014 0003850

ROLLO: RPL RECURSO DE APELACION (LECN) 0000550 /2021

Juzgado de procedencia: JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 13 de VALLADOLID

Procedimiento de origen: MMC MODIFICACION DE MEDIDAS SUPUESTO
CONTENCIOSO 0000741 /2019

Recurrente: Juan María

Procurador: FERNANDO RUIZ LOPEZ

Abogado: HORACIO PARRILLA LEOZ

Recurrido: MINISTERIO FISCAL, Rosario

Procurador: , MARIA JOSE VELLOSO MATA

Abogado: , JESUS ABAD MUÑIZ

SENTENCIA

Ilmo. Sr. Presidente: D. FRANCISCO JAVIER CARRANZA CANTERA

Ilmos. Sres. Magistrados:

D. FRANCISCO SALINERO ROMÁN

Dª EMMA GÁLGERAN SOLSONA

En VALLADOLID, a veintisiete de enero de dos mil veintidós.

VISTOS por esta Sección Primera de la Ilma. Audiencia Provincial de Valladolid, en
grado de apelación, los

autos de modificación de medidas supuesto contencioso núm. 741/19 del Juzgado de Primera Instancia núm.

13 de Valladolid, seguido entre partes, de una como DEMANDANTE-APELANTE D. Juan María , representado

por el Procurador D. FERNANDO RUIZ LOPEZ y defendido por el letrado D. HORACIO PARRILLA LEOZ, y de otra

como DEMANDADA-APELADA D^a Rosario , representada por la Procuradora D^a MARIA JOSE VELLOSO MATA

y defendida por el letrado D. JESUS ABAD MUÑIZ, habiendo intervenido el Ministerio Fiscal; sobre modificación

de medidas.

ANTECEDENTES DE HECHO:

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Seguido el litigio en cuestión por sus trámites legales ante el Juzgado de Primera Instancia de referencia, con fecha 23.7.21, se dictó sentencia cuyo fallo dice así: "Desestimo la demanda formulada Don Juan María frente a Doña Rosario interesando la modificación de la sentencia nº 208/2014 dictada en los autos DMA 188/2013 homologando el convenio regulador suscrito por las partes el 20 de febrero de 2014, la cual se mantiene en su integridad, condenándole al pago de las costas."

TERCERO.- Notificada a las partes la referida sentencia, por la representación de D. Juan María se interpuso recurso de apelación dentro del término legal alegando lo que estimó oportuno. Por la parte contraria se presentó escrito de oposición al recurso. Por el Ministerio Fiscal se ha presentado escrito impugnando la sentencia y adhiriéndose al recurso de apelación. Recibidos los autos en este Tribunal y personadas las partes, se señaló para deliberación, votación y fallo el día 20 de enero de los corrientes, en que ha tenido lugar lo acordado.

Vistos, siendo ponente la Ilma. Sra. D^a Emma Galcerán Solsona.

FUNDAMENTOS DE DERECHO:

PRIMERO.- Como ha declarado esta Sala en relación con la naturaleza del recurso de apelación, entre otras, en la sentencia de 27 de noviembre de 2008, RPL-252/2018, "la más adecuada solución del mismo determina la necesidad de entrar en el examen y valoración de la prueba que obra unida a las actuaciones y ha sido tenida en consideración por la Juez de Instancia, pues el carácter ordinario del recurso de apelación -que efectivamente lo es-, somete al Tribunal que del mismo entiende el total conocimiento de la controversia suscitada, si bien siempre dentro de los límites del objeto o contenido del recurso y con respeto a la obligada congruencia. Desde esta perspectiva cabe señalar que, tal y como ya es criterio uniforme, reiterado y constante de esta misma Audiencia Provincial (Sección Primera) en sintonía con el criterio jurisprudencial sentado, entre otras, en la sentencia de

la Sala Primera del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2015, solo será factible criticar la valoración que efectúe el Juzgador "a quo" de la prueba practicada cuando la efectuada en la instancia fuese ilegal, absurda, arbitraria, irracional o ilógica (SSTS de 9 de marzo de 2010, 11 de noviembre de 2010); se hubiera incurrido en un error patente, ostensible o notorio (SSTS de 10 noviembre 1994, 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002); se extrajeren de la misma conclusiones contrarias a la racionalidad, absurdas o que conculquen los más elementales criterios de la lógica (SSTS de 18 diciembre 2001, 8 febrero 2002, 13 diciembre 2003, 9 junio 2004); o finalmente, si se adoptasen en ella criterios desorbitados o irracionales (SSTS de 28 enero 1995, 18 diciembre 2001, 19 junio 2002)." Y en relación con la eficacia de la prueba de peritos, la Sala Primera tiene declarado (STS. de 22 de febrero de 2006, RC Nº 1419/1999), que el juicio personal o la convicción formada por el informante con arreglo a los antecedentes suministrados no vincula a jueces y tribunales, que pueden apreciar esta según las reglas de la sana crítica, sin estar obligados a las conclusiones del perito (STS. de 16 de octubre de 1980), de las que pueden prescindir (STS. de 16 de febrero de 1994).

En relación con dicha cuestión, tiene declarado la jurisprudencia, asimismo, que los tribunales, al **valorar los dictámenes periciales según las reglas de la sana crítica** (art. 348 de la LEC), deberán ponderar los razonamientos que contengan los dictámenes y los que se hayan vertido en el acto del juicio vista en las declaraciones de los peritos,

pudiendo no aceptar el Tribunal el resultado de un dictamen o aceptarlo, o incluso aceptar el resultado de un dictamen por estar mejor fundamentado que otro; debiendo también tenerse en cuenta las conclusiones conformes y mayoritarias que resulten tanto de los dictámenes de peritos designados por las partes, como de los emitidos por peritos designados por el Tribunal, motivando su decisión cuando no esté de acuerdo con las conclusiones mayoritarias de los dictámenes, debiéndose examinar igualmente las operaciones periciales que se hayan realizado concretamente, los medios, métodos o instrumentos empleados y los datos en que se sustenten los dictámenes, así como la competencia profesional de sus autores y las circunstancias que hagan presumir su objetividad

- (SS.TS de 10 de febrero de 1994,
- 28 de enero de 1995,
- 31 de marzo de 1997,
- 30 de noviembre de 2010,

- 15 de diciembre de 2015,
- 17 de mayo de 2016, entre otras muchas).

SEGUNDO.- En la demanda de modificación de medidas se solicitaba que se dictase sentencia **modificando la cuantía de la pensión de alimentos** establecida en sentencia fijándola en la suma de 150 € mensuales para cada una de las dos hijas menores y gastos extraordinarios de las hijas en una proporción del 40 % a cargo del padre y un 60 % a cargo de la madre.

En el caso de autos consta que con fecha 15 de abril de 2016 se dictó sentencia en el procedimiento MMC 581/2015, JPI nº 13 de esta ciudad., por la que, desestimando la demanda presentada por D. Juan María , se acordó mantener las medidas establecidas en la sentencia 208/2014, en la que homologando el convenio regulador suscrito por las partes, se estableció, entre otros pronunciamientos, la obligación de D. Juan María de abonar en concepto de pensión de alimentos a sus dos hijas la suma de 1.125€ mensuales a cada una de ellas, en total, 2.250€ mensuales, haciéndose cargo cada progenitor del 50% de los gastos extraordinarios de las menores

. El padre dejó de abonar las pensiones de alimentos a sus hijas en septiembre de 2017, dando lugar a la ejecución forzosa 38/2018 y continuó sin abonarlas.

TERCERO.- Sentado lo precedente, en el caso de autos el que fuera domicilio familia fue adjudicado al demandante en el convenio regulador del divorcio, por lo que la demandada, en cuyo favor no se fijó ninguna pensión compensatoria, podía establecer su domicilio y el de sus hijas en el lugar elegido por ella, no habiéndose establecido ninguna condición, por lo cual carece de relevancia a efectos de resolver esta alzada, **el hecho de que la demandada haya accedido al mercado laboral, no conteniendo el convenio regulador ninguna referencia a la situación laboral de dicha persona para fijar la pensión de alimentos.**

En relación con la situación personal, laboral y económica de la madre de las menores, la situación personal, laboral y económica del padre de las mismas, el descenso de ingresos en la actividad de la mercantil DIRECCION000 ., la acumulación de acreedores e impagos de créditos, el cese de su actividad, y las actuaciones seguidas en el Juzgado de lo Mercantil, relativa a dicha sociedad mercantil, documental relativa a dicha sociedad y al demandante, gastos realizados, la despatrimonialización realizada por el actor desde la firma del convenio regulador, la desaparición de aquella entidad mercantil del tráfico jurídico, utilización de vehículos de alta gama por el actor, gastos realizados por el mismo y tren de vida, han sido valorados por la sentencia de instancia sin que exista en ella ninguna de las notas o características negativas a que alude la doctrina jurisprudencial reseñada en el F.D. Primero de la presente sentencia, acerca de la valoración de la prueba, que en este punto se da por reproducida, **debiendo extraerse como conclusión de la valoración de la prueba**, que no se acreditó una alteración de circunstancias fundamentadora de la pretendida reducción de la cuantía de la pensión de

alimentos de las hijas, **no difiriendo la situación, salvo en lo formal, de la que fue alegada en el procedimiento que terminó con la sentencia dictada en el anterior procedimiento** MMC nº 581/2015, y como acertadamente se indica en la sentencia recurrida, **el demandante se dio de baja el 30/9/2019, fecha coincidente con la interposición de la demanda,** salvo en el régimen de autónomos, en el que se dio de baja en octubre de 2020,

pagando las deudas que tenía con la Seguridad Social, **sin explicación acerca de no haber destinado cantidades a pagar la deuda por alimentos a sus hijas,** de modo que procede concluir que se persigue dejar sin efecto lo pactado, en cuanto a la obligación de pagar la pensión de alimentos de las hijas, habiendo manifestado que ofrece en la demanda de nuevo 150 € para cada hija en la esperanza de poder volver a trabajar, **no siendo creíble que se firmara el mencionado convenio regulador asumiendo el compromiso de pago de la pensión de alimentos en la cuantía antes referida,** solamente con base en expectativas de poder trabajar, por todo lo cual, procede confirmar íntegramente la sentencia, desestimando el recurso de apelación.

CUARTO.- Procede imponer a la parte apelante las costas del recurso de apelación conforme a lo dispuesto en el art. 398-1 LEC.

VISTOS, los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLO:

Se desestima el recurso de apelación, promovido por el Procurador D. FERNANDO RUIZ LOPEZ en representación de D. Juan María, frente a la Sentencia dictada en los presentes autos por el Juzgado de 1ª Instancia Nº 13 de Valladolid de fecha 23.7.21, confirmándola íntegramente, con imposición a la parte apelante de las costas del recurso de apelación.

La confirmación de la resolución de instancia supone la pérdida del depósito para apelar consignada por la parte recurrente, al que se dará el destino legal. (D. A. 15ª de la L.O.P.J. según redacción de la L.O. 1/2009 de 3 de noviembre).

MODO DE IMPUGNACIÓN: contra esta resolución cabe, en su caso, interponer recurso de casación, ante esta sala, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a su notificación.

Conforme a la D.A. Decimoquinta de la L.O.P.J., para la admisión del recurso se deberá acreditar haber constituido, en la cuenta de depósitos y consignaciones de este órgano, un depósito de 50 euros, salvo que el recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

El presente texto proviene del Centro de Documentación del Poder Judicial. Su contenido se corresponde íntegramente con el del CENDOJ.